




Los trabajos se retrasaron durante meses por las alegaciones del Consell

Levante-EMV/Efe, Valencia

El Consell ha insistido durante meses en paralizar y atrasar el inicio de las obras del nuevo trazado del Júcar-Vinalopó por considerar que el proyecto del Gobierno central conllevaba perjuicios para el medio ambiente.

Servicios		
	Enviar esta página	
	Imprimir esta página	
	Atención al lector	
Anterior	Volver	Siguiente

La Dirección General de Ordenación del Territorio de la entonces Conselleria de Territorio y Vivienda remitía en enero sus alegaciones a la modificación del trazado casi un mes fuera de plazo. En marzo, el Consell aplazaba las obras del trasvase con un escrito de alegaciones que obligaban al Ministerio de Medio Ambiente a reponder. En él se endurecían las primeras valoraciones y entre líneas se admitía los beneficios ambientales de las modificaciones que había introducido Aguas del Júcar. Un mes después, la UE rechazaba debatir una nueva reclamación del PP al tiempo que la ministra Narbona declaraba que las alegaciones de la Generalitat sí se incluirían en el proyecto del trasvase. Finalmente, en abril se autorizaban las obras del nuevo trazado, al considerarse que las alegaciones carecían de validez. Así se levantaba el último obstáculo para el inicio de los trabajos. El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, calificó ayer por su parte de «provocación» el nuevo trazado del trasvase Júcar-Vinalopó propuesto por el Ministerio de Medio Ambiente y pidió «responsabilidad» al Gobierno central para «escuchar a todos a los usuarios». García Antón realizó estas declaraciones durante la colocación de la primera piedra de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Alacantí Nord y el mismo día que el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Antoni Bernabé, asistió al acto de visita de inicio de obras del tramo C de la conducción Júcar-Vinalopó con toma en el Azud de la Marquesa. En este sentido, el conseller pidió «responsabilidad» al Gobierno central para «escuchar de una vez por todas a los usuarios y, de este modo, renunciar a la ejecución de una obra que nadie quiere». García Antón, quien criticó la «prepotencia» del Ministerio, destacó «la necesidad del diálogo entre todas las partes afectadas».